

**Cronología**  
**Mayo – agosto 2004**

# **Los movimientos sociales en América Latina frente al librecomercio y la criminalización de la protesta<sup>1</sup>**

**Clara Algranati, José Seoane  
y Emilio Taddei**

---

En el marco de una recuperación del crecimiento económico a nivel regional, del relativo encaminamiento sistémico de la crisis de la deuda externa y de la renovada iniciativa que asumen las negociaciones y acuerdos de liberalización comercial, los movimientos sociales y el ciclo de disputas que los mismos vienen protagonizando en Latinoamérica a lo largo de los últimos años enfrentan, en el cuestionamiento al proceso de concentración de ingresos y riquezas en curso, un escenario que agudiza la tensión entre el camino de una efectiva democratización social y las respuestas de militarización del orden público.

En este contexto, la evolución de la conflictividad social –considerando los registros cuantitativos de los hechos de protesta elaborados por el OSAL– se incrementa levemente (6%) a lo largo de este segundo cuatrimestre en comparación con el primero de 2004. Su distribución regional señala, confirmando una tendencia del último año y medio, que la región andina concentra la mayor parte de estos

(40,5%), mostrando un crecimiento similar (5,4%) al total latinoamericano. El mismo es resultado del incremento de las luchas en Bolivia (50%), Perú (7%) y Colombia (6,5%); mientras que, sin embargo, estas disminuyen en Venezuela (13%) y Ecuador (6%).

Por otra parte, modificando la tendencia relevada en el último año, la conflictividad se incrementa notablemente en la región Norte (18,8%), reuniendo la misma un tercio del total de hechos registrados. Este aumento refleja el crecimiento de las protestas en todos los países centroamericanos (Costa Rica, 93%; Honduras, 61%; El Salvador, 40%; Nicaragua, 35%; Panamá, 25% y Guatemala, 0,5%) y se inscribe en el contexto de las resistencias frente a los tratados de libre comercio (en este caso el llamado CAFTA) y la oposición a las políticas de ajuste fiscal.

Por último, en la región Sur, contrariando también la evolución de los últimos tres cuatrimestres, la protesta desciende un 5%, representando un 26,5% del total de conflictos relevados. Esta situación resulta de la disminución de los mismos en Brasil (32%), Chile (17%) y Uruguay (17%); aunque sin embargo la conflictividad aumenta en Paraguay (16%) y Argentina (10%).

En relación a los sujetos que encarnan los conflictos para el período bajo análisis, se destacan, a nivel latinoamericano, el aumento de las protestas de los trabajadores administrativos del Estado (50%), así como una baja (12%) de aquellas impulsadas por los maestros, siendo la conflictividad de los trabajadores del sector público en su conjunto similar a la del primer cuatrimestre de 2004. Por otra parte, mientras disminuyen los hechos protagonizados por los movimientos campesino-indígenas (10%), se incrementan las luchas impulsadas por los movimientos urbanos (35%) y los estudiantes (12%). En el mismo sentido, aunque de menor peso cuantitativo, también aumentan las protestas por violación a los derechos humanos (26%), las de los trabajadores desocupados (27%), y aquellas que se inscriben en lo que llamamos "movimiento antiglobalización neoliberal" (72%). Finalmente, en el caso de las protestas multisectoriales, si bien el total de los registros se mantiene constante, este resultado es consecuencia por una parte del menor número de las convergencias de carácter político (17%), y por la otra del crecimiento de las de carácter gremial (36%). A continuación presentamos un análisis más detenido de estos procesos y de los contextos sociales en que tienen lugar en el marco de las tres regiones referidas anteriormente.

### **Protesta y criminalización social en el Cono Sur**

En el escenario sociopolítico planteado en el Cono Sur (Algranati, Seoane y Taddei, 2004), la dinámica de las disputas sociales aparece signada por la disminución de la

conflictividad en varios de los países de esta región así como por la intensificación de la criminalización de la protesta. En Brasil, donde los hechos de conflicto registrados este cuatrimestre caen respecto del anterior, se destaca la continuación de aquellos protagonizados por profesores y funcionarios de Facultades y escuelas universitarias de distintos estados del país en reclamo de aumento salarial. También exigiendo un incremento de haberes, los servidores de justicia y profesionales de la salud de diferentes hospitales realizan huelgas prolongadas, como en el caso del Hospital das Clínicas de Ribeirao Preto de San Pablo que se extiende durante 58 días. En el sector público además es importante señalar la huelga de los trabajadores del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) en reclamo de una recomposición de la planta de empleados de dicha institución. En este cuatrimestre también la Central Única dos Trabalhadores (CUT) promueve, el 16 de julio, manifestaciones en 22 capitales del país contra la política económica del gobierno nacional en el “Día Nacional de movilizaciones y luchas” organizadas en conjunto con la Coordinación de los Movimientos Sociales (CMS).

En relación a los movimientos campesinos cabe señalar que continúan, aunque en menor cantidad que en el cuatrimestre anterior, las ocupaciones de tierras y de oficinas del INCRA por parte del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en reclamo de una reforma agraria, de crédito para los campesinos, y entrega de canastas de alimentos básicos. Por otra parte, en respuesta al “abril vermelho” organizado por el MST, en el mes de mayo los productores rurales de Rio Grande do Sul realizan protestas para sensibilizar a la población sobre la importancia del agro-negocio, intentando prevenir nuevas ocupaciones de sus propiedades.

En Argentina, si bien el número de protestas es mayor al del primer cuatrimestre del año, las mismas son más fragmentadas y menores en cuanto a la cantidad de participantes. En este contexto se destacan las protagonizadas por los trabajadores desocupados (“piqueteros”) en reclamo de planes de empleo, aumento del monto de los mismos, alimentos para los comedores populares, trabajo genuino y tarifa social para las garrafas de gas. Por su radicalidad e impacto nacional es significativa la toma de la planta de almacenaje petrolífero en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, por parte de desocupados que reclaman puestos de trabajo y que en los primeros días de septiembre, una vez levantada la ocupación, son detenidos y procesados judicialmente. Por otra parte, el 18 de mayo la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) realiza una jornada de lucha en todo el país para exigir una mejor distribución de la riqueza así como una consulta popular sobre el destino del superávit fiscal, y el Frente de Gremios Estatales realiza movilizaciones en reclamo de negociaciones colectivas y aumento salarial. Por último, los médicos de hospitales públicos, empleados judiciales y docentes universitarios realizan huelgas en reclamo de incremento de haberes. En el caso del movimiento campesino se destacan las protestas contra el desmonte de bosques en la provincia de Santiago del

Estero, y en Salta contra la venta de reservas naturales. En este marco de fragmentación, una de las pocas movilizaciones que concita la unidad de un amplio arco político-social es la marcha realizada el 5 de junio contra el envío de tropas a Haití y la guerra de Irak, y en solidaridad con Cuba. También logran una amplia convocatoria las marchas de repudio al incremento de la judicialización de la protesta y por justicia luego del asesinato de un dirigente de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) de la CTA.

En Paraguay el movimiento campesino continúa con la toma de tierras y asume reivindicaciones contra el modelo agro-exportador y la oposición a las privatizaciones. Estos reclamos logran la adhesión de pobladores, comunidades eclesiales y autoridades locales que se oponen al cultivo de soja y a la utilización de agro-tóxicos. Dicha confluencia fructifica en la realización conjunta de una “manifestación por la vida y la soberanía, contra los efectos en el medioambiente y contra la extranjerización de la propiedad de la tierra”. Hacia finales del cuatrimestre los campesinos se movilizan nuevamente por la libertad de los 300 presos políticos del movimiento y por el fin de los procesos judiciales en marcha contra más de 1.300 personas. También en Paraguay los docentes de la capital y de distintos puntos del país marchan para exigir un aumento salarial y repudiar el compromiso del gobierno con el FMI, que impide destinar fondos públicos para tal fin. En el contexto del crecimiento de la conflictividad social en dicho país, es importante destacar la convergencia de un amplio abanico de sectores sociales y políticos en el llamado “Frente Nacional por la Vida y la Soberanía” que promueve una manifestación frente al Parlamento en rechazo de la propuesta de la ley de privatización de las empresas estatales de telefonía y ferrocarriles. Esta lucha consigue que el gobierno retroceda en sus pretensiones privatistas cuando la Cámara de Senadores pospone sin fecha el tratamiento de la ley en cuestión.

En Chile se destacan las protestas estudiantiles en reclamo de pasaje escolar y créditos universitarios en diferentes puntos del país que involucran a estudiantes del ciclo primario, secundario y universitario. Por otra parte, persiste el conflicto mapuche contra la explotación de los recursos naturales que les pertenecen históricamente. Finalmente, del 2 al 5 de junio tiene lugar en la localidad de Pucón un encuentro de los Altos Representantes de los 21 países integrantes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). En esta fecha se realiza, como contracumbre, el “Foro de Pueblos Originarios y Organizaciones Sociales”, organizado por la Coordinación de Organizaciones e Identidades Territoriales Mapuches, y acompañado también por manifestaciones del Consejo de Todas las Tierras.

Por último, en Uruguay, la disminución por segundo cuatrimestre consecutivo de la conflictividad social, que acumula para el presente período mayo-agosto de 2004 una caída del 50% respecto de lo registrado para los cuatro últimos meses de 2003, refiere al

hecho de que las disputas se concentran fundamentalmente alrededor de la próxima contienda electoral presidencial. A pesar de ello, resultan importantes las protestas de los trabajadores estatales de diversos gremios: la banca pública, funcionarios y médicos de hospitales de todo el país, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) de Montevideo y de Rocha, la Asociación de Funcionarios Postales de Uruguay, entre otros. Si bien estas protestas comienzan como demandas aisladas, a partir de fines de junio se constituye un movimiento multisectorial encabezado por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que coordina varias movilizaciones, entre ellas un paro nacional y diferentes manifestaciones hacia el Ministerio de Economía.

Tal como desarrollan los diferentes artículos que integran el dossier "Criminalización social e 'inseguridad'" publicado en este número, en esta región aumenta claramente la violencia contra los sujetos colectivos que protagonizan las luchas, ya sea a causa de represión directa, crímenes de dirigentes sociales o gatillo fácil en los barrios populares, así como también se constituyen, estimulados por los medios de comunicación, movimientos cívico-ciudadanos que, en los distintos países, exigen aumento de las penas, políticas de mano dura e incremento de la presencia policial en las calles.

En este sentido se destaca en Brasil el movimiento "Basta" de Río de Janeiro, que discute ideas para reducir la criminalidad y presentar propuestas sobre seguridad pública. En Argentina este tipo de movimiento aparece con características de masividad en el cuatrimestre anterior, pero en este período el Parlamento convierte en ley proyectos demandados en dichas manifestaciones, particularmente en relación al endurecimiento de las penas. En Paraguay se realizan movilizaciones con las mismas características en varias ciudades del país. A comienzos de junio una marcha recorre Asunción para repudiar el asesinato de un estudiante, en Concepción las consignas se dirigen a solicitar el castigo a los delincuentes y mayor atención de las autoridades, también hay movilizaciones en San Pedro y Yaguarón, mientras que en el departamento de Caaguazú una manifestación exige "mayor seguridad". También en Uruguay se registran manifestaciones contra la violencia y por la "seguridad" en diversas regiones del país que –aunque de menor dimensión que en Argentina, Paraguay y Brasil– enarbolan los mismos reclamos.

Sin embargo en el mismo período resulta importante el aumento de la violencia por parte de los aparatos represivos en estos países. En Brasil la policía desaloja violentamente a vendedores ambulantes y personas sin techo, y reprime protestas estudiantiles. También son reprimidas grandes movilizaciones en la provincia argentina de San Luis con decenas de detenidos y heridos. Por otra parte, hechos de "gatillo fácil" contra jóvenes en Argentina y Brasil involucran a integrantes de las fuerzas policiales y son repudiados por los vecinos con manifestaciones en barrios populares hacia las comisarías, que en algunos casos se convierten en puebladas. En Paraguay la policía desaloja y

encarcela a campesinos sin tierra en el mes de agosto, mientras que en Chile casi la totalidad de las protestas callejeras de los distintos sectores sociales culmina con represión policial y decenas de detenciones.

Otra de las formas de violencia que se incrementa es la ocasionada por agentes privados de “seguridad” o bien por personas armadas que atacan a dirigentes sociales. En Pontal do Paranapanema, Brasil, integrantes del Movimiento de Agricultores Sin Tierra (MAST) son baleados por efectivos de seguridad privada que trabajan para hacendados. En Paraná, pistoleros armados disparan sobre familias sin tierra frente a una propiedad y matan a un trabajador rural del MST. En ambos casos no hay detenidos. Por último, en Argentina, el 26 de junio es asesinado en el barrio porteño de La Boca un dirigente de la FTV-CTA.

Durante este cuatrimestre aumentan también significativamente el número de procesos judiciales y el encarcelamiento de dirigentes sociales en el conjunto de los países de la región, así como las movilizaciones de diversos sectores contra la criminalización de la protesta. En este sentido, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se desatan dos hechos de represión policial y detenciones masivas: durante una protesta contra la reforma del Código Contravencional, y ante una movilización realizada el 31 de agosto en la Plaza de Mayo para exigir la libertad de los presos políticos. En ambos casos las organizaciones sociales denuncian la presencia de gran cantidad de “infiltrados” durante los hechos; efectivos policiales de civil y vehículos sin patente actúan deteniendo y golpeando a los manifestantes como en tiempos de la pasada dictadura militar. Por otra parte, en Brasil hay importantes rebeliones en los presidios en diferentes ciudades, y en Chile un grupo de presos políticos realiza una huelga de hambre por tiempo indeterminado por la reducción de las penas que consigue apoyo de estudiantes y organizaciones de DD.HH., obteniendo mejoras parciales de sus situaciones procesales.

***“Durante este cuatrimestre aumentan también significativamente el número de procesos judiciales y el encarcelamiento de dirigentes sociales en el conjunto de los países de la región, así como las movilizaciones de diversos sectores contra la criminalización de la protesta”***

## **Democracia, libre comercio y recursos naturales: el conflicto social en la Región Andina**

La realidad sociopolítica del área andina se distingue no solamente –como lo señalamos anteriormente– por concentrar a nivel regional el mayor porcentaje de conflictos sociales a lo largo del último año. Durante este segundo cuatrimestre esta región fue también escenario destacado de una contraposición de magnitud continental. Por una parte, de experiencias de democracia participativa (particularmente los referéndum en Venezuela y Bolivia) donde se expresa particularmente la confrontación alrededor de la política sobre los hidrocarburos y sobre la apropiación y distribución de los beneficios de dichos recursos naturales. Por otra parte, ante la acción de los movimientos sociales se destaca la continuidad y profundización de las políticas de criminalización de la protesta en un contexto signado por la creciente intervención militar norteamericana y por la prioridad y velocidad que adopta la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EE.UU. y una parte de los países andinos. Esta contraposición que señalamos toma cuerpo, por ejemplo, en el hecho de que mientras en Venezuela tiene lugar el primer referéndum revocatorio de un mandato presidencial en toda la historia del continente –que culmina con la revalidación del presidente Chávez–, el gobierno colombiano impulsa la aprobación de un estatuto antiterrorista que vulnera derechos y libertades públicas e individuales (ver artículo de Jaime Zuluaga Nieto en este número del OSAL).

Así, con la realización el 15 de agosto del referéndum y el sólido triunfo del NO, se cierra en Venezuela el proceso del revocatorio del mandato presidencial impulsado por la coalición opositora (reunida bajo el nombre de Coordinadora Democrática) desde finales del pasado año (Lander, 2004). La puesta en práctica de uno de los instrumentos de la llamada democracia participativa consagrado en la Constitución de 1999, la altísima participación social y la transparencia del proceso –convalidada por todos los veedores internacionales presentes– hacen de dicha jornada uno de los eventos de mayor contenido democrático en la historia reciente de nuestra región. Luego del ciclo de triunfos electorales entre 1998 y 2000, para el gobierno del presidente Chávez –y para el proceso de reformas sociales y económicas impulsadas en los últimos años– esta jornada viene a renovar la legitimidad democrática de la llamada “revolución bolivariana”, de cara especialmente al escenario internacional y a la política seguida por EE.UU. respecto de la misma, aun con los límites que plantea el desmantelamiento de la polarización que signa dicho proceso<sup>2</sup> (ver artículo de Margarita López Maya y Luis Lander en este número). En este sentido, el complejo de fuerzas e intereses que se articulan alrededor de la realidad político-social venezolana hizo de dicha elección un punto de atención continental, que implicó también a un amplio abanico de organizaciones y movimientos sociales latinoamericanos a través de campañas de solidaridad, actos, declaraciones y la presencia de diferentes delegaciones. También para estos resultaba impor-

tante la capacidad de constitución política de mayorías sociales en un proceso de apropiación y redistribución progresiva de los recursos societales (ver artículo de Antonio González Plessmann) –en este caso particularmente cifrado en la renta petrolera.

Aún con mayor claridad en el proceso boliviano reciente también se entrecruzan el debate y la confrontación social alrededor de la política sobre los hidrocarburos y la realización del referéndum (18/7) convocado por el gobierno de Carlos Mesa, que había sido una de las demandas planteadas en las jornadas del pasado octubre en dicho país. En este sentido, a lo largo del presente cuatrimestre no sólo se aprecia un incremento de la conflictividad<sup>3</sup>, sino que además una parte significativa de la misma se orienta alrededor de la demanda de la nacionalización de los recursos energéticos y la disputa sobre los contenidos y realización de la referida consulta. Sin embargo, en el amplio espectro de los movimientos sociales y las organizaciones políticas vinculadas a los mismos se expresan posturas divergentes respecto del posicionamiento a impulsar en relación al referéndum (llamado al boicot, voto por la nacionalización –nulo–, y convocatoria a apoyar las tres primeras preguntas y voto negativo en el resto). Interpretados por el gobierno como una legitimación de sus políticas, los resultados de la consulta sin embargo plantean una consideración más compleja. En este sentido, si bien el voto por el Sí se impuso al del NO en todos los casos, si se contabilizan agrupados aquellos que se pronunciaron negativamente, en blanco o que anularon el voto, este conjunto supera las respuestas afirmativas para las dos últimas preguntas. Por otro lado vale señalar también que la contienda electoral contó con una abstención del 40% si consideramos solamente al universo de inscriptos en condiciones de votar. El posterior anuncio gubernamental de la voluntad de exportar el gas a través de puertos peruanos y la presentación de un cuestionado proyecto oficial de ley de hidrocarburos, que inicia una puja entre el Ejecutivo y el Congreso alrededor del tratamiento y aprobación de dicha ley, parecen volver a articular en la oposición a dicha propuesta a un amplio arco social, y orientar la disputa sobre la definición de dicha legislación. Las demandas en relación con la propiedad y usufructo social de los hidrocarburos –que inspiraron, entre otras cuestiones, la “guerra del gas” de octubre de 2003– aún siguen pendientes.

Desde otra perspectiva, también el análisis sobre la intensa protesta sectorial y regional en Perú nos plantea entenderlo en el marco de la transición democrática abierta en dicho país tras la caída de Fujimori. Las movilizaciones y protestas del movimiento cocalero, la huelga impulsada por un sector del sindicato de maestros (SUTEP) particularmente importante en la región Sur del país, las permanentes protestas campesino-indígenas en el municipio de Ilave (que habían desembocado en el pasado cuatrimestre en el linchamiento del alcalde), las marchas y ocupaciones promovidas por los estudiantes universitarios<sup>4</sup> señalan los hechos más significativos que durante el presente cuatrimestre dan cuenta del incremento global de la conflictividad en dicho país (ver artículo de Ramón

Pajuelo Teves en este número). En este proceso, la realización de un paro cívico nacional convocado por la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) junto a otras organizaciones sociales, si bien tuvo una importante adhesión, particularmente en algunas regiones del interior del país, puso de manifiesto también las dificultades y los límites para la construcción de espacios de convergencia político-social del conjunto de las resistencias y movimientos a nivel nacional (ver artículo de Eduardo Toche en este número)<sup>5</sup>.

Al igual que en Perú, también en Ecuador gobiernos inspirados en la aplicación de políticas neoliberales (y en las orientaciones estratégicas de EE.UU.) conviven con una escasa popularidad y enfrentando el cuestionamiento y las protestas motorizadas por diferentes movimientos sociales, particularmente campesino-indígenas. Sin embargo, para este período, en el caso ecuatoriano, se registra un descenso de la conflictividad social (6%) respecto del pasado cuatrimestre. En este marco el llamado al "levantamiento indígena" convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) junto a otras organizaciones sociales y políticas a principios de julio –simultáneamente a la realización de la XXXIV Asamblea de la OEA en Quito– y su levantamiento dos días después, muestran las dificultades que atraviesan a los movimientos sociales –y particularmente al movimiento indígena, luego de su paso por el gobierno y frente a la ofensiva política sobre el mismo seguida por el Ejecutivo (Larrea Maldonado, 2004). En relación a ello, a posteriori de dichas protestas el Poder Ejecutivo avanza en la designación de nuevas autoridades en el Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos de Ecuador (CODENPE), relevando a aquellas vinculadas a las organizaciones indígenas. A lo largo del cuatrimestre se destaca, por otra parte, el prolongado conflicto que llevan adelante los jubilados en reclamo de un incremento de las pensiones, que luego de una huelga de hambre por la que se cuentan trágicamente varios fallecimientos obtiene una provisoria satisfacción a sus demandas.

Por último, la conflictividad social se incrementa en Colombia –donde se destacan las luchas protagonizadas por diferentes sectores de los trabajadores públicos, las organizaciones campesinas y las convergencias multisectoriales– en el marco de un gobierno que, al tiempo que promueve una orientación económica neoliberal y el recorte de los derechos democráticos (en este caso especialmente bajo el llamado "estatuto antiterrorista"), parece gozar, a diferencia de los casos anteriores, de un mayor consenso de la opinión pública. En este contexto el relativo triunfo del conflicto impulsado por los trabajadores de la empresa petrolera estatal frente a las iniciativas gubernamentales de privatización, que contó con un significativo respaldo social (ver artículo de Héctor Vásquez en este número), señala, también en este país andino, la magnitud regional de las disputas sociales respecto de los recursos naturales. Por otra parte, la importante manifestación del 1° de mayo y la adhesión que convocó el Paro Cívico Nacional de mediados de dicho mes señalan también el creciente rechazo que despierta particularmente el TLC

con EE.UU., del que dicho país ha sido uno de sus principales impulsores en la región andina.

Esta geografía de la protesta y la dinámica que caracteriza la acción de los movimientos sociales en la región –breve-mente reseñada– se confrontan, en muchos casos, con el crecimiento de la represión y las políticas tendientes a criminalizar las formas de lucha y la organización colectiva. La iniciativa gubernamental del ya referido “estatuto antiterrorista” en Colombia, y las propuestas legislativas para constreñir el derecho de huelga y penalizar los cortes de ruta impulsadas por el gobierno peruano (Pizarro, Trelles y Toche, 2004), así como la vigencia y uso en ambos casos de las llamadas “zonas de emergencia” (que habilitan la intervención de las Fuerzas Armadas en el “conflicto interno”), son los ejemplos salientes en este período de la trágica afirmación del “neoliberalismo de guerra” bajo la justificación de la inseguridad y la amenaza terrorista. Esta tendencia a la militarización de la sociedad progresa simultáneamente al incremento del control y presencia militar norteamericana en la región andina, en este caso particularmente concentrado en la frontera ecuatoriano-colombiana alrededor del llamado “Plan Patriota”. En este contexto la iniciativa comercial norteamericana en la región cobra nuevos bríos con el inicio de las negociaciones del TLC con Colombia, Perú y Ecuador. Entre mayo y septiembre tienen lugar las cuatro primeras rondas de dichas negociaciones que, con la participación hasta el momento del gobierno boliviano en calidad de observador, aspiran a concluir en los primeros meses del próximo año. La suscripción de cláusulas de confidencialidad, la marcha forzada a la que han sido sometidas las negociaciones, así como las exigencias norteamericanas en relación a protección de inversiones, telecomunicaciones, servicios y propiedad intelectual, permiten anticipar las amargas consecuencias que traería aparejada la rúbrica de dicho acuerdo. El inicio y evolución de estas negociaciones han impulsado a las campañas nacionales contra el ALCA previamente existentes, y a un conjunto amplio de movimientos sociales, a promover iniciativas de seguimiento y formación sobre el tratado así como a incorporar en sus programáticas el cuestio-

***“... la iniciativa comercial norteamericana en la región cobra nuevos bríos con el inicio de las negociaciones del TLC con Colombia, Perú y Ecuador. Entre mayo y septiembre tienen lugar las cuatro primeras rondas de dichas negociaciones...”***

namiento al mismo, al tiempo de buscar la construcción de coordinaciones más amplias. En esta dirección, y en un proceso que tuvo sus primeras expresiones en los inicios de 2004 (Algranati, Seoane y Taddei, 2004), la coordinación y convergencia regional de un amplio abanico de organizaciones sociales en rechazo a este tratado tuvieron en julio un nuevo jalón en el encuentro andino realizado en el marco del I Foro Social de las Américas reunido en Quito, Ecuador (del que emergió un cronograma de acciones regionales) así como en la solidaridad y coordinación forjadas con un importante número de organizaciones de EE.UU. dando cuenta de la nervadura internacionalista que signa la práctica de los movimientos sociales. También en este sentido el panorama que reseñamos para la región andina corporeiza en toda su dimensión la cristalización histórico-social de la confrontación entre los derechos democráticos de los pueblos y la dinámica de constitución de los monopolios internacionales (Amin, 2001) que caracteriza a la mundialización neoliberal actual.

### **Centroamérica: conflictos y convergencias multisectoriales contra el ajuste fiscal y el libre comercio**

El inicio del año 2004 estuvo signado, en la región mesoamericana y caribeña, por un hecho político de fundamental importancia para el futuro de Centroamérica: la conclusión en el mes de enero de las negociaciones comerciales entre EE.UU. y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en vistas al establecimiento de una zona de "libre comercio" en la región (CAFTA, por sus siglas en inglés). Si bien la implementación efectiva de este acuerdo necesita aún de la ratificación parlamentaria en los países involucrados, las disputas políticas y conflictos sociales en relación a este proyecto hegemónico cobran una importancia significativa durante el segundo cuatrimestre. Estas protestas contra el "libre comercio" prolongan y profundizan, en muchos casos, las acciones contra el CAFTA que acompañaron el proceso de negociaciones desde sus comienzos en 2003, y parecen prefigurar, como señalamos en el OSAL N° 13, los escenarios y las modalidades en torno a los cuales probablemente se expresarán las dinámicas contrahegemónicas en la región en los próximos años.

El incremento ya señalado del número de conflictos sociales en la región mesoamericana respecto al período anterior aparece vinculado, entre otras, a dos dinámicas predominantes: las protestas contra los procesos de ajuste fiscal promovidos y exigidos a los gobiernos por el FMI, y las acciones contra los tratados y las consecuencias del libre comercio. Este crecimiento del número total de registros de conflictos, que se concentra esencialmente en seis países centroamericanos (Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Guatemala), va acompañado de una consolidación de los procesos de convergencia multisectorial que adquieren una dimensión política nacional cuestionando la profundización de las opciones neoliberales de la mayoría de los gobiernos,

y que ponen de manifiesto la consolidación de un movimiento popular centroamericano contra el libre comercio y el neoliberalismo armado.

En este período guardan particular relevancia las protestas de los trabajadores del sector público (fundamentalmente en educación y salud en Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana) contra las tentativas de reducción del gasto público. Estas acciones logran en muchos casos articular sus reclamos con otros sectores sociales, dinamizando los procesos de convergencias multisectoriales antes señalados. También cabe destacar la participación estudiantil en la protesta, que guarda especial relevancia en El Salvador y Nicaragua (por reclamo de aumento presupuestario y contra el aumento de las tarifas del transporte) al igual que en Costa Rica y Panamá, donde estudiantes secundarios, terciarios y universitarios tienen un rol destacado en los conflictos que impugnan las negociaciones del TLC con EE.UU. En el mismo sentido es preciso señalar la participación de pequeños productores agropecuarios en acciones de denuncia contra los procesos de liberalización comercial.

El aumento del número de conflictos registrado en la región –que en muchos casos obtienen satisfacción a sus reclamos y logran imponer la revisión de las medidas cuestionadas– va acompañado por un endurecimiento general de las respuestas represivas por parte de la mayoría de los gobiernos. Esta situación agudiza una preocupante tendencia a la criminalización de la protesta social, a la cual nos hemos referido en cuatrimestres anteriores. Frente a la creciente radicalidad que adoptan las modalidades de protesta (conflictos de alcance nacional, acciones por tiempo indeterminado), los gobiernos responden con la represión y detención de militantes sociales y con la profundización de la política de “mano dura”, que se expresa también a través de las iniciativas de modificación regresiva de la legislación (reducción de la edad de imputabilidad de los menores, endurecimiento de las penas, etcétera).

En relación a la protesta social, la gran movilización nacional protagonizada en Costa Rica por el Movimiento Cívico Nacional constituye, por su amplitud y por sus resultados, el conflicto multisectorial más significativo del período. La semana de intensas movilizaciones que tuvieron lugar entre el 24 y 31 de agosto resultó de la confluencia de las protestas de los trabajadores estatales en demanda de una nueva negociación salarial para el sector público y los reclamos de miles de transportistas contra el monopolio de la revisión técnica vehicular a manos de la transnacional española RITEVE (ver artículo de Ariane Grau Crespo). A lo largo de una semana de intensas movilizaciones, cortes de rutas y bloqueos, la lucha ganó la adhesión de organizaciones sociales, comunitarias y estudiantiles, transformándose en un verdadero movimiento de carácter nacional que impugnó la participación de Costa Rica en el CAFTA. El Movimiento Cívico Nacional obtuvo la firma de un acuerdo con el gobierno que reconoce el aumento salarial de los tra-

bajadores del sector público y estipula la renegociación del contrato monopólico de RITEVE. Finalmente, las renuncias de los ministros de Hacienda y de Transportes y del equipo negociador del TLC evidencian el impacto político de este conflicto.

En Panamá, el proceso de negociaciones para su incorporación al CAFTA es cuestionado por los reclamos de los productores agropecuarios que exigen la exclusión de las negociaciones de 16 rubros agrícolas. Estas protestas adquieren un carácter multisectorial y político con la participación de organizaciones sindicales y sectores estudiantiles. Organizaciones campesinas que a fines de mayo protagonizaron una jornada de lucha contra la ampliación del Canal de Panamá también se suman a estas movilizaciones contra el TLC. En momentos en que se produce el recambio presidencial con la asunción de Martín Torrijos como nuevo presidente panameño, las convergencias sociales parecen marcar un cambio cualitativo en la evolución del conflicto social, que también se expresa en la masiva oposición al TLC registrada en la consulta popular organizada por Alianza Nacional por La Vida (ANAVI) en la ciudad de Panamá. En el marco de una huelga indefinida, los docentes primarios y secundarios y médicos internos de hospitales hondureños protagonizan, con el apoyo de distintos sectores sociales, importantes concentraciones en defensa del estatuto docente y del aumento del monto de las becas del internado. Dichos reclamos, acompañados de tomas de edificios públicos y cortes de ruta, culminan con acuerdos que reconocen los aumentos exigidos y el pago de las deudas salariales.

La ley de modificación del régimen de jubilaciones y pensiones votada por el Parlamento mexicano, que se inscribe en la renovada ofensiva privatizadora y de ajuste fiscal lanzada por el presidente Fox, desata el conflicto protagonizado por los trabajadores del seguro social que se oponen a dicha medida. Estas iniciativas gubernamentales generan la convergencia de las organizaciones sindicales disidentes del sector público que convocan a una huelga general del sector el 1º de septiembre. También, a inicios de julio, en República Dominicana todos los hospitales del Seguro Social son paralizados por tiempo indefinido en contra de un proyecto de ley de privatización de la salud pública y en demanda del pago de sueldos atrasados, aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. A mediados de mayo, diferentes federaciones, asociaciones y empresas del sector agropecuario piden al presidente Mejía que suspenda el acuerdo de libre comercio con EE.UU. Estos reclamos no logran sin embargo impedir la firma a inicios de agosto de dicho acuerdo comercial. Durante todo el cuatrimestre en este país caribeño se registran también apagones contra el incremento en el coste de la electricidad.

Frente a los aumentos tarifarios del sector transporte, los estudiantes de colegios y universidades salvadoreñas protagonizan acciones de protesta caracterizadas por la dinámica autoorganizativa de las mismas. La violenta represión policial ordenada por el flamante gobierno del presidente Elías Saca genera la solidaridad de otros sectores que se

suman a las protestas de rechazo a la política gubernamental y en repudio a la firma de acuerdos comerciales con EE.UU. En Nicaragua se generaliza en el mes de mayo una protesta de alumnos en reclamo del aumento del 6% del presupuesto educativo. Frente a la intensificación y nacionalización del conflicto, el gobierno reprime y encarcela a numerosos militantes estudiantiles. Al cabo de estos enfrentamientos el movimiento obtiene sus reivindicaciones. También en este país, y luego de diferentes huelgas apoyadas por los jóvenes y el Frente Nacional de Trabajadores que culminan con un paro nacional del sector, los obreros nicaragüenses de la construcción acuerdan con los empleadores un incremento salarial. En el marco de un paro general de 48 hs que tiene lugar a inicios de junio, en Guatemala, diversas organizaciones campesinas, estudiantes universitarios, trabajadores sindicalizados y pobladores cortan rutas, pasos fronterizos y lugares estratégicos de la capital para reclamar el cese de los desalojos y de la persecución a líderes campesinos, el aumento del salario mínimo, y para expresar su rechazo al TLC con EE.UU. Luego de un principio de acuerdo entre las organizaciones y el gobierno, este último ratifica la política de desalojos violentos, provocando la muerte de siete campesinos.

Los conflictos reseñados permiten observar los procesos de agregación de las luchas sociales en la región mesoamericana y caribeña en el período. Frente a la politización de muchas protestas, la mayoría de los gobiernos responden profundizando las políticas represivas y de criminalización de la pobreza, al mismo tiempo que se convoca desde los sectores de poder y empresariales a manifestaciones en reclamo de "seguridad". En este sentido debe destacarse la tentativa de las fuerzas políticas conservadoras mexicanas para organizar y "nacionalizar" un reclamo por mayor "seguridad pública" a través de la realización de una nutrida marcha que tuvo lugar en el mes de junio en Ciudad de México (ver artículo de Raquel Sosa Elízaga). En igual dirección, y frente a una intensa campaña mediática, se registran en Guatemala grandes manifestaciones de repudio a la violencia en el mes de agosto que sirven de pretexto al presidente Berger para lanzar la Cruzada Nacional contra la Violencia a cargo del ejército y la policía. En Honduras, a un año de la vigencia de la Ley Antimaras, el gobierno vuelve a recurrir al ejército para reprimir y disolver protestas, y se inicia una campaña para la implantación de la pena de muerte. Pocas semanas antes del traspaso de mando al nuevo presidente electo, la presidenta panameña Moscoso lanza una ofensiva parlamentaria para la aprobación del Plan "Mano Dura" que tiene como resultado inmediato la detención de más de seiscientas personas.

Los procesos de convergencia social contra el neoliberalismo y el libre comercio por un lado y la respuesta represiva de los estados por el otro parecen marcar la intensificación de un proceso de polarización social en la región centroamericana en torno al destino de los planes hegemónicos imperiales. El resultado de este proceso será decisivo para el futuro de las organizaciones sociales y para la gestación de un modelo de desarrollo alternativo al "libre mercado".

## De Quito a Porto Alegre

Tal como se desprende de la lectura de las cronologías publicadas en los números anteriores del *OSAL*, la promoción de acuerdos de libre comercio, impulsados particularmente por EE.UU., y la difusión de protestas y campañas que se oponen a este modelo de integración hemisférica, guardan una importancia significativa en los últimos doce meses en la región latinoamericana. Así, en enero de este año el décimo aniversario de entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) coincide con dos hechos que ponen de manifiesto (bajo la negociación del llamado ALCA de dos pisos) los progresos de Washington en su ofensiva comercial sobre la región: la entrada en vigencia del TLC con Chile, y la conclusión de las negociaciones del TLC con la mayoría de los países centroamericanos (CAFTA). Durante el segundo cuatrimestre, y en el marco del desbloqueo de las negociaciones en la OMC<sup>6</sup> (reunión en Ginebra, en julio), la iniciativa comercial del país del Norte avanza en las negociaciones del TLC con los países andinos (Colombia, Ecuador y Perú; con Bolivia en calidad de observador) así como con Panamá, y concluye similar tratado con República Dominicana. Por su parte los representantes del Viejo Continente dan un nuevo impulso a su estrategia comercial en la región en el marco de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea celebrada en medio de protestas antiglobalización en la ciudad de Guadalajara, México, a finales de mayo. En igual dirección deben señalarse las múltiples negociaciones para la firma, programada para fines de octubre de este año, de un TLC entre la Unión Europea y el MERCOSUR basado en el respeto de las líneas directrices de la OMC.

La promoción de la integración comercial se acompaña, como hemos señalado en anteriores ocasiones, de un creciente proceso de intervención militar destinado a garantizar el control estratégico del espacio territorial. En relación a ello múltiples iniciativas tienen lugar durante el presente período, desde la continuidad del llamado "Plan Patriota" y diferentes misiones militares norteamericanas en Ecuador y Perú, hasta la realización de la "Operación Panamax 2004" y el "Operativo UNITAS". En este contexto, la intervención militar en Haití por parte de tropas chilenas, brasileras, argentinas y uruguayas es uno de los hechos más significativos del cuatrimestre. Esta intervención, promovida en Naciones Unidas por EE.UU. y Francia, constituye un preocupante antecedente que pone fin a una larga tradición diplomática y de seguridad latinoamericana de no intervención militar de ejércitos latinoamericanos en otros países de la región.

De cara a estos procesos, el desarrollo y consolidación de las convergencias regionales de los movimientos populares tienen, a lo largo del cuatrimestre, tres encuentros sobresalientes además de la proyección continental que le cupo al referéndum venezolano. A finales de junio se realiza en la ciudad argentina de Iguazú, provincia de Misiones, el I Foro Social de la Triple Frontera con la presencia de más de mil delegados de Paraguay, Argentina,

Brasil y Uruguay, que discutieron, entre otras cuestiones, sobre la necesidad de preservar las riquezas naturales estratégicas que posee la región, particularmente el Acuífero Guaraní –una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo. Por otra parte, la realización del V Foro Mesoamericano celebrado en San Salvador, El Salvador, en el pasado mes de julio, constituyó también, una vez más, un significativo espacio de convergencia de los movimientos y organizaciones sociales de esa región para avanzar en la articulación de acciones comunes tendientes a impedir la aprobación del TLC con EE.UU.

Por último cabe destacar la realización del I Foro Social de las Américas reunido en Quito, Ecuador, del 26 al 30 de julio, y precedido por la II Cumbre de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas de Abya Yala. Dicho encuentro, que reunió a más de 11 mil participantes provenientes de 45 países, dio continuidad a las acciones de coordinación de la Campaña Continental contra el ALCA y significó un importante espacio de debate y articulación de los movimientos sociales americanos de cara a la realización del V Foro Social Mundial, que bajo los ejes de la emancipación social y la lucha contra el capitalismo, el patriarcado y el racismo, se celebrará en Porto Alegre, Brasil, en el próximo enero.

## Bibliografía

Algranati, Clara; Seoane, José y Taddei, Emilio 2004 "Disputas sociales y procesos políticos en América Latina", en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 13, enero-abril.

Amin, Samir 2001 "Capitalismo, imperialismo, mundialización", en Seoane, José y Taddei, Emilio (comps.) *Resistencias Mundiales [De Seattle a Porto Alegre]* (Buenos Aires: CLACSO).

Lander, Edgardo 2004 "Venezuela: proceso de cambio, referéndum revocatorio y amenazas internacionales", en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 13, enero-abril.

Larrea Maldonado, Ana María 2004 "El movimiento indígena ecuatoriano: participación y resistencia", en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 13, enero-abril.

Pizarro, Rosa; Trelles, Laura y Toche, Eduardo 2004 "La protesta social durante el toledismo", en *Perú Hoy. Los mil días de Toledo* (Lima: DESCO).

## Notas

1 Para la elaboración del presente artículo se consideraron las cronologías del conflicto social correspondientes al período mayo-agosto de 2004 (cuya versión sintética se presenta a continuación), los resultados del análisis cuantitativo sobre la evolución y características de la conflictividad, así como los informes que, en base a ello y sobre dicho período, fueron realizados por el Equipo del OSAL. Agradecemos a todos ell@s y especialmente a Ivana Brighenti por sus observaciones y dedicación en la revisión del texto.

2 Por otra parte es interesante señalar que, en el marco de una disminución general del conflicto en relación a cuatrimestres pasados, para el presente período además resulta menor el referido directamente a la polarización político-social (considerando que aquel suscitado por las jornadas de validación de firmas para el referéndum y por la realización de este representa sólo un cuarto del total). En el conjunto se destacan las numerosas ocupaciones de viviendas —especialmente en Caracas— las movilizaciones y cortes de ruta de pobladores en reclamo de mejores servicios públicos, las huelgas de los docentes universitarios, y las protestas de los trabajadores metalúrgicos de la empresa Sidor, ejemplos que dan cuenta de la amplitud y complejidad de la movilización y disputa social que se desarrolla en el marco del proceso político-social venezolano actual.

3 Considerando los datos obtenidos por el relevamiento realizado por el OSAL, en términos cuantitativos la misma crece un 50% respecto de la consignada para el primer cuatrimestre de 2004. Dicho crecimiento se expresa particularmente en los conflictos impulsados por los trabajadores del sector público (especialmente los maestros) y del sector privado; por los movimientos campesino-indígenas y las protestas multisectoriales. En una alta proporción esta conflictividad está relacionada con la exigencia de nacionalización de los hidrocarburos y el cuestionamiento al referéndum y a las empresas petroleras.

4 En esta breve reseña vale agregar también las recientes movilizaciones campesino-indígenas y la protesta regional contra la explotación minera del cerro Quilish durante el mes de septiembre de 2004.

5 El carácter fragmentado de la protesta y las dificultades de constituir marcos políticos estables de articulación son algunos de los señalamientos reiterados por las dos contribuciones que sobre el proceso social reciente en Perú publicamos en el presente número del *OSAL*. En relación a ello incluso puede rastrearse un debate sobre la pertinencia de nominar a los sujetos que protagonizan dichos conflictos como movimientos sociales.

6 Los resultados de esta reunión señalan que la Unión Europea y EE.UU. logran destrabar el capítulo agrícola de las negociaciones bloqueado luego de la repercusión de las protestas antiglobalización acontecidas en la última reunión de la OMC en Cancún (septiembre de 2003).